

C.A. de Valdivia

Valdivia, once de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°48-2021, que incide en causa R.I.T. O-101-2020 del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, el abogado, don Pablo Álvarez Pincheira, en representación de la parte demandada, Agrícola Remehue S.A., interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva pronunciada por doña María Isabel Palacios Vicencio, Jueza titular del aludido tribunal, fechada el uno de marzo de dos mil veintiuno, por la cual resolvió en los términos siguientes:

“Que SE ACOGE la demanda interpuesta por don LEONARDO FROILÁN SALDIVIA GÓMEZ, en contra de su ex empleador AGRÍCOLA REMEHUE SA, ambos individualizados, condenándose a la demandada a pagar al demandante lo siguiente:

1) \$5.000.000 como indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia del accidente laboral ocurrido el 28 de junio de 2017;

2) \$3.000.000 como indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia del accidente laboral ocurrido el 12 de noviembre de 2019.

3) A pagar reajustes e intereses desde que el presente fallo quede ejecutoriado.

4) A pagar las costas del juicio, regulándose las personales en la suma de \$800.000.”

Se declaró admisible el recurso de nulidad, fundado en tres causales deducidas en forma subsidiaria, esto es, las de los artículos 477, 478 letra c) y, por último, 478 letra b), todos del Código del Trabajo, para luego fijar día y Sala para el conocimiento del recurso, habiéndose presentado a alegar las partes el seis de mayo pasado, en audiencia verificada en plataforma virtual, a la que se apersonó el abogado redactor del escrito, por la empresa recurrente, resaltando los aspectos más relevantes de su postura, en tanto el letrado, don Matías Henríquez, por la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio intentado.

Tras la audiencia, la causa quedó en estado de adoptar el acuerdo que a continuación se reproduce.

OÍDOS Y CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que, en forma preliminar al examen puntual de la tríada de causales de invalidación hechas valer por la demandada, pertinente es dejar apuntado que la nulidad laboral tiene por objeto asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende del tenor de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo.

Asimismo, ha de recordarse que este arbitrio procesal tiene un carácter extraordinario, cualidad que se evidencia en la excepcionalidad de los presupuestos sobre cuya base se edifica cada una de las causales previstas por el legislador del ramo, lo cual guarda relación con el fin perseguido por ellas, con directo impacto en los márgenes de la competencia material de los tribunales superiores, cuya revisión queda constreñida por las mismas, imponiendo por ende a quien recurre el deber de ser preciso en el fundamento de las que ha optado por someter al criterio jurisdiccional.

De lo anterior se sigue que enfrentamos un arbitrio de derecho estricto, el cual ha de ajustarse cabalmente a la normativa que lo regula, por lo que su procedencia estará siempre determinada, tanto por la naturaleza de las resoluciones impugnadas, como por las causales expresamente establecidas en la ley y, en último término, por las formalidades que debe cumplir el libelo recursivo en lo atinente a la manera de formulación de esos motivos, en este caso, uno en subsidio del otro, lo cual de paso condicionará el orden del escrutinio a desarrollar en este fallo.

A título de clausura de este punto y dado que tendrá incidencia en el planteamiento de cada uno de los tópicos abordados, se deja constancia de los antecedentes de contexto esgrimidos al efecto que, en suma, se traducen en que el actor fue contratado como obrero agrícola por la empresa demandada - que es de tamaño pequeño al contar con una planta de siete trabajadores -, con fecha 24 de mayo de 2005, con carácter indefinido, habiéndose desempeñado en tareas propias de la explotación agrícola y ganadera, para las cuales ha contado con una experiencia de alrededor de 15 años en el rubro - y más de 30 en total según su propia versión. Se precisa además que se demandó el pago de una indemnización de daño moral por la suma de \$60 millones, motivado por el padecimiento de dos accidentes laborales, que habrían irrogado sufrimiento físico y psíquico al trabajador, atribuidos a la responsabilidad de la empleadora por el



incumplimiento de sus deberes de información y de seguridad. Al efecto, se detalla un primer episodio, ocurrido en el Fundo Estero Largo, el 28 de junio de 2017, mientras el dependiente se encontraba sacando fardos desde un galpón para forrajear a los animales, en cuyo contexto se enredó en una amarra, sufriendo una caída desde altura, cayéndole fardos encima y golpeándose la rodilla derecha, que le causaron lesiones finalmente diagnosticadas como: *“rotura de menisco medial de rodilla derecha, rotura subtotal, rotura parcial LCM”*, que tras licencia médica, intervención quirúrgica, medicación, sesiones kinesiológicas e infiltración, le han provocado dolores que aún persisten. En tanto, narra luego un segundo evento, acontecido en el fundo Remehue, el 12 de noviembre de 2019, en el marco de labores de conteo para castración de novillos, en que al revisar la numeración del arete de uno de ellos ya instalado en una manga y atrapado con una tijera, repentinamente le habría pegado un cabezazo que repercutió en su hombro y costado izquierdo perdiendo el conocimiento, provocándole también lesiones, esta vez consistentes en: *“desgarro muscular a nivel de musculatura intercostal y fractura cerrada del primer arco costal anterior izquierdo”*, fruto de las cuales debió reincorporarse a sus labores tras licencia médica, con subsistencia de dolores y uso de cabestrillo.

En general, junto con cuestionar el modo de ocurrencia de los episodios, se ataca la imputación de responsabilidad atribuida a la empresa demandada, Agrícola Remehue S.A., pues se estima haber probado en juicio tanto que se cumplió con el deber de información al trabajador, al dársele las instrucciones correspondientes y proporcionado los elementos adecuados para operar en forma segura para su salud y vida, tales como: guantes, botas, trajes de agua, protector solar, gafas y overol, pese a lo cual se otorgaron en el fallo a su favor lo que se estiman ser cuantiosos montos de indemnización: por \$5 millones en razón del primer hecho y \$3 millones a consecuencia del segundo, respectivamente.

I.- En cuanto a la causal amparada en el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación al artículo 69 de la Ley N°16.744 y 184 del código citado.

SEGUNDO: Que incumbe ocuparse del principal tópico de anulación invocado por el recurrente, inspirado en la situación que se verifica cuando la



sentencia *“se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*.

En este sentido, se precisa que si bien hay derecho a percibir una indemnización de perjuicios ante la ocurrencia de un accidente del trabajo, ello sólo se da en la medida que éste se hubiere producido por dolo o culpa del empleador, así como siempre y cuando quede demostrado que éste no haya adoptado los debidos resguardos tendientes a evitarlo.

En esa línea de argumentación, sostiene que en el considerando undécimo del fallo se consigna expresamente que se demostró que el trabajador recibió charlas sobre riesgos en la faena, medidas preventivas y métodos de trabajo correcto, especificándose inclusive los riesgos de caídas y de ser golpeado por animales, así como las consecuencias que de ello podía derivarse, habiendo recibido ejemplar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa y constando el acta de recepción de elementos de protección personal respectiva; pese a todo lo cual la sentenciadora culminó estimando que las acciones preventivas informadas no decían relación específica con la aludida caída desde altura en trabajo con fardos ni con el provocado cabezazo de un animal, no habiendo tenido por comprobado tampoco la proporción y consiguiente uso de elementos de protección adecuados, siendo los cuidados necesarios y debidos los que se asevera no haber adoptado la empleadora.

Aduce luego, que también se mencionó probado que en el artículo 116 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, estaban contemplados los riesgos de caída con consecuencias como fracturas o esguinces; pero pese a ello el tribunal apreció que ni esos ni las medidas preventivas consecuenciales se relacionaban puntualmente con las caídas producidas desde fardos, como había acaecido en la especie, faltando también el conocimiento relativo al levantamiento acertado de esa clase de materiales. Añade que en el mismo considerando se daba cuenta de la acreditación de entrega de implementos para el desempeño del trabajo; sin embargo, en el considerando décimo tercero se acabó concluyendo que no se capacitó ni entregó los elementos de seguridad apropiados, extendiendo, en su concepto, la interpretación del artículo 69 de la Ley N°16.744 y del artículo 184 del Código del Trabajo a circunstancias por las que no puede responder el empleador, al tratarse de imprevistos ajenos a la posibilidad de



control de aquél y a situaciones imputables a descuido del propio obrero agrícola. Grafica lo anterior con que mientras en el considerando noveno se da por establecido que la caída se produjo a causa del enredo del trabajador con las amarras de los fardos y desde una altura inferior a 1,8 metros, así como en el undécimo se tiene por acreditado que el cabezazo del novillo se verificó estando éste en la manga respectiva inmovilizado para la castración y el trabajador permanecía fuera de ella, se termina infiriendo responsabilidades que a su juicio no concurren.

Por todo lo expuesto, afirma no comprender cómo en la sentencia se dedujo que al no haber contenido el Reglamento Interno explícitamente el contexto puntual descrito para la ejecución de las labores examinadas, se finalice estableciendo que su representada era la responsable de los dos accidentes del trabajo y se le condenara a indemnizar al actor.

TERCERO: Que, atendido el panorama antes reseñado, se añade que la recta interpretación que debió darse a los artículos 69 de la Ley N°16.744 y 184 del código del ramo habría llevado a desestimar la demanda, toda vez que dichos textos no son garantía de indemnidad para el trabajador, mientras sostener lo contrario conduciría al extremo de imponer a una de las partes una carga imposible de satisfacer, en términos que la sola existencia de un daño traería aparejada “*per sé*” la responsabilidad indemnizatoria, cuando en la realidad hay situaciones que escapan al control del empleador. De esta manera, para entender vulnerado el tenor de tales reglas debía haberse producido el accidente del trabajo por culpa o dolo de este último, acorde al criterio jurisprudencial asentado o, dicho de otro modo, entendiendo que la sola producción del daño no trae aparejada la obligación de indemnizar.

Se aclara en fin que las normas citadas propician la observancia de un deber de cuidado del empleador, de acuerdo a las circunstancias del caso, considerando que en esta clase de contratos, que aprovechan a ambas partes, incumbe responder de culpa leve, debiendo comprobar un nivel ordinario o mediano de diligencia o cuidado por el empleador, según los artículos 44 y 1547 del Código Civil, de forma tal que si se cumplió ese deber de seguridad no podía estimarse haber existido culpa del mismo en el respectivo accidente, cuya sería la situación acontecida en ambos casos juzgados.



CUARTO: Que, en aras de delimitar el asunto en discusión, al menos en lo que concierne a este ítem de nulidad esgrimido, oportuno es recordar que, según la doctrina (desarrollada a partir del recurso de casación en el fondo), se ha establecido que esa transgresión puede ocurrir de la siguientes formas: *“contraviniéndola formalmente, interpretándola erróneamente o haciendo una falsa aplicación de ella”* (Casarino Viterbo, Mario, Manual de Derecho Procesal, Tomo IV, pág. 351). Así, pues, *“Se contraviene su texto formal si la sentencia impugnada está en oposición directa al texto expreso de la ley (...) se interpreta erróneamente la ley cuando el juez, al aplicarla al caso del que está conociendo, le da un sentido o alcance diverso al que le haya señalado el legislador”*. Y existe una falsa aplicación de la ley: *“cuando el juez la aplica a una situación no prevista por el legislador, o bien, deja de aplicarla a un caso ya reglado”* (Benavente Gorroño, Darío, Derecho Procesal Civil, pág. 223 y 224).

Enseguida, tampoco puede obviarse que la causal citada se refiere estrictamente a temas de orden jurídico, por lo que resulta ser inadmisibles alterar por intermedio de ella los presupuestos fácticos que se han consignado en la sentencia.

QUINTO: Que, acorde al definido marco conceptual, confrontado con el mérito de las argumentaciones contenidas en el recurso y alegaciones orales vertidas, es dable desprender que el núcleo de la controversia planteada está centrado en dirimir si, como se acusa, la Sra. Jueza del Trabajo de Osorno incurrió en una infracción de ley al haber interpretado de un modo extensivo el texto de los artículos 69 de la Ley N°16.744 y 184 del Código del Trabajo, exigiendo que tanto a nivel del cumplimiento del deber de información a entregar al trabajador acerca de los alcances de sus labores, como, en general, en la adopción de medidas preventivas orientadas a darle seguridad en su desempeño, incluyendo la proporción de los implementos afines a ese objetivo, ello hubiese comprendido específicamente la índole de escenarios puntuales vividos.

En esto, en consonancia con lo apuntado en el considerando décimo segundo del fallo analizado, bien vale recordar que el artículo 184 del Código del Trabajo dispone que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y



seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Por otra parte, el artículo 69 de la Ley N°16.744 previene que cuando el accidente se deba a culpa o dolo del empleador, la víctima podrá reclamar al empleador responsable del accidente incluso el daño moral.

Finalmente, en el artículo 21 del D.S. N°40, de 1969, se previene que el empleador tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos, considerando que esos riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa.

SEXTO: Que, en tal orientación, la censura de invalidación ha provenido de confrontar esencialmente lo que se dio por establecido por el tribunal de la instancia en los considerandos noveno a décimo primero del fallo impugnado, con lo concluido después en el décimo cuarto, donde queda deducida la responsabilidad de la entidad empleadora frente al incumplimiento de sus deberes de información y seguridad específicos para los casos examinados.

De esta suerte, evaluado el contenido de las apreciaciones jurídicas vertidas en los citados apartados del dictamen jurisdiccional, esta Corte no divisa que haya existido el acusado yerro en la sentencia, toda vez que en aquéllos se ha desplegado un desarrollo argumental plenamente congruente con una plausible interpretación *“pro operario”* acerca del alcance que es factible dar a los deberes de información del empleador y consecuencial derecho a saber del trabajador, como al de seguridad para la salud y vida del mismo en el entorno laboral, habiendo enfatizado que la medida de la exigencia legal es la de *“proteger eficazmente”*, cuestión que no se habría observado presente en el proceder de la empresa.

SÉPTIMO: Que, en efecto y aportando mayores luces respecto del sentido del mandato cuya vigencia la sentenciadora descuella, más que el motivo citado por el recurrente resulta ser en esta temática el décimo cuarto, en que categóricamente expresa: *“Que como se ha señalado el artículo 184 del Código del Trabajo exige que las medidas de seguridad que debe adoptar el empleador sean aquellas “necesarias”, esto es, adecuadas a la labor desarrollada y que sean eficaces para proteger la*



vida y salud del trabajador, esto es, eficientes, que logren el resultado perseguido”.

En ese contexto, no se vislumbra de qué manera se ha contrariado una acertada exégesis del tenor de las disposiciones analizadas, de tal forma que lo que se ha propiciado en el fallo es contribuir a ver concretado a cabalidad el alcance de un deber fundamental establecido en beneficio de la parte económicamente más débil de la relación laboral, aterrizado en el punto concreto en controversia en el juicio.

OCTAVO: Que, como corolario de lo razonado, no se ha detectado la acusada infracción a las disposiciones legales planteadas por el recurrente, ya que, por un lado, no se explicitó con toda nitidez la modalidad de la infracción legal imputada de entre la tríada de posibles alternativas, lo que desde ya conspira con los márgenes restringidos de un arbitrio de marcado cariz jurídico como éste; mientras, por otro, se ha hecho primar coherentemente en el criterio jurisdiccional un tinte compatible con principios rectores en esta área especial del derecho, como lo es el protector o tutelar, frente a la evidente asimetría reinante en el vínculo que liga a las partes de esta clase de contratos.

Por último, del tenor del escrito recursivo en este rubro, se advierte que más que resaltar la presencia de un vicio de índole legal, se manifiesta disconformidad con las inferencias fácticas a que se arribó por la magistrada del fondo, sustrato que por la vía de esta causal deviene en inmodificable; por todo lo cual no será admisible prestar oídos a esta primera vertiente del reclamo de nulidad.

II.- En cuanto a la causal subsidiaria cimentada en el artículo 478 literal c) del Código del Trabajo.

NOVENO: Que, en lo que atinge al capítulo invalidatorio que intitula este párrafo y que fuera subsidiariamente planteado, dirigido a producir la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar las conclusiones fácticas a que arribó el tribunal inferior, en síntesis, el recurrente reitera los presupuestos de contexto antes descritos y se concentra una vez más en relevar la crítica a la reputada contradicción que sostiene existir entre los hechos establecidos en los considerandos noveno a décimo primero, entre los cuales en el décimo desmintió en parte inclusive las afirmaciones del demandante, con el colofón que acaba extrayendo en el



décimo tercero. En éste culminó estableciendo la responsabilidad de la entidad empleadora en la dupla de accidentes del trabajo, por cuanto no se habría capacitado ni instruido al actor para desarrollar las labores específicas que sirvieron de marco a la producción de aquéllos. Patentiza la incorrección de lo dictaminado, por insistir en haberse demostrado la capacitación general realizada en torno a las tareas habituales asociadas a la condición del obrero agrícola, por lo que, en su opinión, cabía haber calificado que en los eventos planteados el empleador había dado cumplimiento a su deber de resguardo del trabajador sin haber infringido el artículo 184 del texto laboral, rematando con el aserto que: *“Pensar lo contrario llevaría al absurdo que toda acción que realice un trabajador debe estar consignada en un protocolo”*.

DÉCIMO: Que, no obstante y según quedó anticipado en el considerando séptimo de esta sentencia, la lectura del fallo en análisis sugiere que se proporcionaron por la magistrada del grado atinadas razones para haber efectuado la calificación de insuficiencia del proceder del empleador en rubros tan relevantes, como el deber de informar y de proteger la seguridad del trabajador en su desempeño, lo cual sirvió para edificar los pilares del establecimiento de responsabilidad en los accidentes producidos.

Basta al efecto remitirse a todo lo demás argumentado a propósito del motivo de anulación precedente, desde que debe reiterarse que, tal como fueron asentados los hechos, los cuales son intangibles también por la vía de esta causal de nulidad, el encasillamiento jurídico consecuencial de los mismos no se aprecia erróneo, si se tiene en vista la medida de eficacia protectora incorporada en la exigencia legal, sumada a una exégesis extensiva que se ha observado conforme al principio *“pro operario”*, que gobierna esta índole de materias, según se apuntó.

UNDÉCIMO: Que no conspira contra la reflexión recién expuesta, el que se afirme por quien recurre, que llevado al terreno del absurdo el argumento implicaría supuestamente la obligación, imposible de asumir por el empleador, de incluir en sus protocolos toda acción a realizar por un trabajador para así entender excluida su responsabilidad frente a un accidente laboral.

Lo dicho es válido, puesto que lo que se comprende haber echado en falta en los casos resueltos y demandado por la jurisdiscente como contrapartida, es la contemplación en ellos de situaciones no ajenas, sino



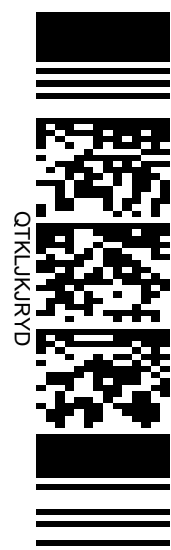
habituales al desempeño de un obrero en un predio agrícola, como lo son precisamente las faenas de extracción de fardos, que por su habitual apilamiento para forraje en bodega suponen ejercicio de tareas en altura, cualidad propia de las bodegas rurales – en este caso cercana a los 4 metros -, y de castración y otros procedimientos aplicados sobre animales, con la variedad de sus más comunes riesgos asociados, incluyendo la consecuente adopción de las medidas preventivas y proporción de implementos de protección personal idóneos.

DUODÉCIMO: Que, en virtud de lo expresado, puede sostenerse que el enfoque argumental labrado por la juzgadora ha sido acertado y se condice con una correcta calificación jurídica de los hechos valorados en la instancia, los cuales estimó configurativos de una hipótesis de responsabilidad del empleador ante los accidentes padecidos por su ex trabajador demandante, quien prestó servicios a su respecto por casi una década y media; de forma tal que careciendo también de mérito la pretensión invalidatoria construida al alero de esta causal, tampoco podrá brindársele cabida a la hora de resolver.

III.- En cuanto a la causal subsidiaria adscrita al artículo 478 literal b) del Código del Trabajo.

□□ DÉCIMO TERCERO: Que, por último, la fuente de infracción legal redundante en nulidad formulada en concordancia con el acápite que encabeza esta porción terminal del recurso, en relación también con el mentado artículo 184 del citado cuerpo preceptivo, que tiene por fundamento similares argumentaciones a las ya vertidas con precedencia – las que se pide dar por expresamente reproducidas-, estriba en asignarse haber equivocado el rumbo, en su opinión, la Sra. Jueza en las apreciaciones recaídas sobre la prueba aportada al juicio, por alegar nuevamente que su parte probó que el trabajador contaba con las capacitaciones para desempeñarse como obrero agrícola, incluido el manejo de animales y trabajo en altura, reputando que lo experimentado por el actor fue circunstancial e imposible de prever para el empleador.

En la misma línea, resalta que en el considerando décimo, respecto al primer accidente, el tribunal señaló que el demandante no había acreditado el uso de bastón ni de venda elástica que refería, así como tampoco que quedara con secuelas a causa del tratamiento médico que recibió, salvo el



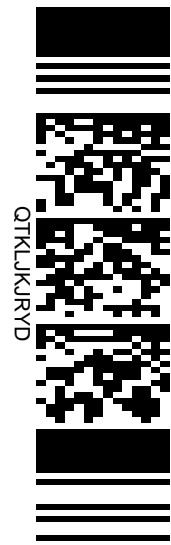
dolor que sentía. A propósito del segundo accidente, en tanto, indica que quedó establecido no haber sido efectivo que haya perdido el conocimiento, de suerte que trabajó normalmente incluso al día siguiente. A renglón seguido, precisa que en idéntica motivación se adujo que el trabajador sufría dolores de pierna hasta el día de hoy y que no había logrado la recuperación completa del primer accidente, para culminar patentizando que había quedado acreditado que no existía resolución alguna de incapacidad, al punto que el pretensor había vuelto a trabajar como obrero agrícola, esta vez para un tercero.

DÉCIMO CUARTO: Que, producto de lo anterior, finaliza sosteniendo que una adecuada ponderación de la prueba debió conducir a la conclusión que el empleador no había vulnerado el referido artículo 184, debiendo haber negado lugar a la demanda de indemnización de perjuicios incoada por daño moral o, en subsidio, haber reducido el monto a indemnizar en virtud de los hechos y circunstancias concurrentes, sobre todo si se hubiese tenido en cuenta, que en el considerando décimo quinto había sido la propia sentenciadora quien aseveró la imposibilidad de establecer daño moral, basado en la aflicción que puede provocar a una persona la existencia de secuelas físicas o estéticas, ya que éstas no se habían acreditado, como tampoco, la incapacidad laboral del actor ni el dolor que ello podía causar.

De esta manera, a su entender, el razonamiento del tribunal ha sido totalmente contradictorio con la prueba rendida, además de carente de toda consideración en torno a una serie de circunstancias, como que el trabajador nunca había dejado de percibir ingresos pues siempre estuvo sujeto a licencias médicas debidamente cubiertas, amén de haber recibido el tratamiento de parte de los organismos pertinentes respecto de los efectos provocados por los accidentes.

Censura, en consecuencia, el alto monto de las indemnizaciones establecidas, ejemplificando que sólo por haber estado con licencia por 29 días merced al segundo accidente y haber asistido a sesiones de kinesiología en cinco ocasiones, el tribunal del grado había otorgado una indemnización de \$3 millones por concepto de daño moral, lo cual, a su juicio, escapaba de toda lógica y de las máximas de experiencia.

DÉCIMO QUINTO: Que, con miras a un acertado pronunciamiento respecto de esta ulterior causal de nulidad, que consiste en la “*infracción*

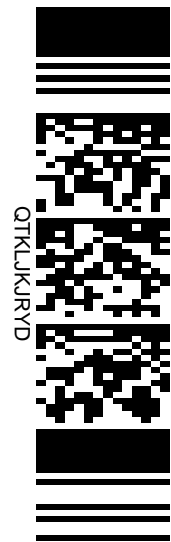


manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”, pertinente es resaltar que para entender encontrarnos ante una falla de esta clase se requiere la exhibición de una alteración evidente y notoria, factible de desprender de la sola lectura de la sentencia que se ataca, en la que se deje ver que el razonamiento judicial ha transgredido los cánones jurídicos de lógica, experiencia o ciencia que integran el sistema de ponderación antes mencionado.

Al mismo tiempo, ha de quedar palmario que el motivo en comento faculta al tribunal que conoce del recurso de nulidad para controlar que en el proceso de valoración probatoria, que ha efectuado el tribunal “*a quo*”, no se haya sobrepasado los parámetros inherentes a las aludidas reglas, que positivamente contempla el artículo 456 del Código del Trabajo, sin que baste para provocar la anulación del razonamiento jurisdiccional la mera circunstancia de discrepar del mismo, quedando además vedado en este contexto al tribunal que revisa, aquilatar nuevamente los medios de prueba, facultad que es privativa del que se ocupa de la instancia.

DÉCIMO SEXTO: Que, deslindados los alcances estrictos de esta causal, al confrontar el escrito contenedor del recurso con los raciocinios reprochados, sólo cabe, por una parte, consignar la falta de precisión e integridad que éste presenta en su conformación, al haberse limitado a hacer una alusión genérica a la atribuida deficiencia jurídica en el proceso evaluador probatorio judicial, enunciando formalmente la cita del trío de reglas que componen la sana crítica; pero obviando del todo introducirse siquiera en la especificación de cuál de los principios de la lógica, máximas de experiencia o conocimientos científicos habrían sido quebrantados y prescindiendo, por ende, de otorgarles el necesario desarrollo, lo que impide estimar cumplido el estándar ligado a un motivo de invalidación de esta naturaleza.

En otro extremo, similar ejercicio de cotejo entre el arbitrio formulado y la argumentación constatada en el fallo, sólo arroja claridad en lo atinente a la notoria divergencia e insatisfacción del representante de la entidad empleadora con el contenido de las apreciaciones alusivas al material acreditativo acopiado al pleito, evidenciando una hipótesis diversa y alternativa a la que fuera establecida por el tribunal; no obstante lo cual tal



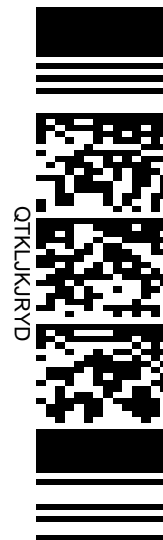
disconformidad deviene insuficiente para erigirse en fuente de nutrición apta para estructurar una pretensión de invalidez de una sentencia.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que no debilita lo argüido, la reportada contradicción supuestamente existente entre los considerandos décimo y décimo quinto de la determinación del grado, con la inferencia final en la que desembarca la magistrada laboral, puesto que si bien no se niega que esos apartados desmienten algunas de las aseveraciones entregadas por el trabajador en cuanto a los efectos de los episodios vivenciados (verbigracia: uso de bastón, venda elástica y algunas otros efectos declarados a consecuencia de la caída desde altura, así como pérdida del conocimiento fruto del cabezazo del animal, determinadas secuelas físicas y estéticas e incapacidad laboral), se observa que tal desmentido no tuvo la fuerza ni hizo mella para dejar desprovistas de demostración las extendidas consecuencias realmente perjudiciales que los eventos padecidos irrogaron al actor, como para haber llegado a desestimar el concepto de daño moral demandado.

Ulteriormente, se advierte que a la hora resolutive sobre el capítulo indemnizatorio acogido, no pudo menos que estar informado también el parecer jurisdiccional acerca de la serie de circunstancias que el recurrente destaca como pasadas por alto u omitidas (licencias médicas y su cobertura, más prestaciones clínicas y kinesiológicas recibidas por el obrero agrícola), lo cual se ve reflejado en la acuciosa relación de la secuencia de hechos que el propio tribunal tuvo por acreditados, según catastro compilado en el considerando octavo; situación que termina por hacer sucumbir, de igual manera, el sustento de esta tercera causal subsidiaria.

DÉCIMO OCTAVO: Que, así las cosas, al no haberse ponderado presente alguno de los polos constitutivos de los déficit de derecho denunciados por el recurrente en su libelo, ejercicio estéril resulta establecer la forma cómo ellos pudieron tener influjo sustancial en lo dispositivo de la sentencia.

Por estos razonamientos y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes del Código de Trabajo, se **RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado, don Pablo Álvarez Pincheira, en representación de la parte demandada, Agrícola Remehue S.A., en contra de la sentencia definitiva pronunciada con fecha uno de marzo de dos mil



veintiuno, por la Sra. Jueza titular del Juzgado del Trabajo de Osorno, doña María Isabel Palacios Vicencio, la que en consecuencia **NO ES NULA**.

Regístrese digitalmente, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

N° Laboral - Cobranza-48-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Piñeiro F., Marcia Del Carmen Undurraga J., Luis Moises Aedo M. Valdivia, once de mayo de dos mil veintiuno.

En Valdivia, a once de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

